

REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto, el concepto de democracia no tiene una definición única. A lo largo de la historia ha existido una gran cantidad de estudios que, poco a poco, han ido enriqueciendo el concepto a nivel teórico, a la vez que la práctica política ha incluido más condiciones para su ejercicio. De alguna forma, la teoría y la práctica se interrelacionan para darle un contenido más amplio. Los actores políticos la van redefiniendo teóricamente a través de las prácticas, que se tornan rutinas. A su vez, las instituciones democráticas también se transforman con el devenir, creándose una arquitectura que permite el funcionamiento del sistema democrático. Las teorías resaltan las prácticas innovadoras que ayudan, más adelante, a reconceptualizar dichas prácticas, sobre todo las que en concreto defienden la democracia.

Podemos afirmar, en síntesis, que de acuerdo con todos los autores que analizamos, la mayor fuerza de la democracia reside en que ofrece la posibilidad de renovar a los gobernantes periódicamente y en que éstos tienen que rendir cuentas a los ciudadanos. Dentro del conjunto de los sistemas democráticos, encontramos tanto a los regímenes presidenciales como a los parlamentarios, cuyas Constituciones y normatividad político-electoral son diferentes, pues se distinguen en varias características, como en el poder que otorgan y las facultades que confieren a cada una de las ramas del gobierno, por ejemplo, pero son iguales en que siempre se basan en un principio fundamental: todos los miembros de la comunidad política, de la *polis*, deben ser tratados, conforme a la Constitución, como si estuvieran igualmente calificados para la participación en la toma de decisiones colectiva. En otras palabras, todos los individuos son considerados políticamente iguales. Es por ello que los ciudadanos pueden autogobernarse, es decir, vivir de acuerdo con leyes de su propia elección, que los obligan frente a la colectividad, es decir, suscriben un contrato social.

Es preciso no olvidar nunca que nada asegura que una vez alcanzada la democracia no pueda darse un retroceso. La democracia es un sistema de gobierno en el que se debe trabajar día con día. En ciertos países, cuando surgen crisis económicas, su viabilidad se pone en duda. En otros, incluso quizá más democráticos, en ciertas situaciones extremas, como los ataques terroristas, las exigencias democráticas se relajan. Basta recordar la llamada Ley Patriota, que sin duda infringía los derechos individuales consagrados en la Constitución.

Toca a los ciudadanos librar la lucha cotidiana por mantener el sistema democrático, junto con los derechos liberales, individuales y sociales. También son responsables de asegurar el equilibrio entre el liberalismo y la democracia, entre la igualdad y democracia, y de ponderar la cercanía o lejanía del ideal democrático. La democracia debe ponderarse constantemente en relación con otros valores, como los de libertad, igualdad y justicia.

La democracia es un proceso, y como tal no incluye nada que garantice que una decisión tomada democráticamente sea la mejor posible, la más justa, la que en verdad expresa la voluntad general. Como comentamos anteriormente, algunos dictadores (*v. gr.*, Hitler) llegaron al poder a través de un proceso democrático, así como también muchos líderes autoritarios, como los ayatolas musulmanes ortodoxos. Por otro lado, tanto las mayorías como las minorías se pueden equivocar. Lo fundamental es resaltar que la democracia procura la legitimidad de la decisión, aunque no nos asegura ni su efectividad ni su éxito.

Para recapitular, podemos afirmar que el proceso democrático impone ciertas reglas restrictivas y establece límites al poder, que permiten que las decisiones sean aceptadas por todos los participantes. Los ciudadanos son considerados libres e iguales, y gozan de los mismos derechos de asociación, participación y expresión política; se trata de un sistema político en que se consideran las demandas de los individuos; se adoptan las decisiones propuestas por el mayor número de ciudadanos, es decir, se acepta el principio de la mayoría; se establece el control electoral incluso sobre las políticas públicas, que diseñan los gobernantes electos, y se asegura que la ciudadanía tenga acceso a la información adecuada. Asimismo, se organizan elecciones periódicas, lo que permite evaluar las capacidades de los funcionarios gubernamentales al instrumentar las decisiones colectivas. Lo más importante: los gobernantes rinden cuentas a los gobernados (o al menos deben hacerlo).

Todo ello permite que aceptemos las decisiones colectivas como obligatorias. En última instancia, la democracia es justamente la forma en que se toman esas decisiones, con base en las cuales se reparten los beneficios y las cargas de la cooperación en la sociedad y los bienes públicos, y se resuelven los conflictos entre los intereses de los distintos grupos. Es, entonces, el proceso mismo el que brinda la legitimidad, más que el éxito de una decisión determinada, aunque sin duda la deliberación entre los participantes ayuda a que aquélla sea la más adecuada. En este sentido, el federalismo contribuye a recuperar el carácter participativo del sistema democrático, que permite a la sociedad encontrar “desde abajo” soluciones innovadoras a problemas complejos; los estados federados son laboratorios de experimentos sociales, que pueden ser imitados por otras localidades o, incluso, por el gobierno federal.

Podemos parecer aventurados al sostener que con el desarrollo de la tecnología, o de la llamada “revolución digital”, es plausible esperar nuevas condiciones que juzgaremos necesarias para estar en condiciones de reconocer a una verdadera democracia en el nuevo escenario. La posibilidad de realizar votaciones instantáneas por medio de internet a nivel global redefine la concepción tradicional de un electorado constreñido al territorio nacional; podemos dejar volar la imaginación para concebir una tecnología que facilite las prácticas de la democracia, como llevar a cabo un plebiscito instantáneo en varias y distantes zonas del mundo, por ejemplo; es decir, ya es válido referirse a la democracia digital como concepto analítico y como práctica social; sin embargo, no conviene ignorar que también esta innovadora tecnología podría desvirtuarla, dada la posibilidad de manipular las votaciones a través de la red. Si bien Twitter podría permitirnos contar con un conocimiento inmediato de los deseos e intenciones de la población, es precisamente esa inmediatez la que lo desvirtúa, en tanto que impide una toma de decisiones fundamentada en la información, la reflexión y la deliberación.

La tecnología y la innovación no deben dejarse avanzar sin una debida supervisión; es necesario aceptar la responsabilidad colectiva de construir un futuro donde ambas estén centradas en la humanidad y en la necesidad de servir al interés público, así como de asegurar que las empleamos para propiciar “un desarrollo sostenible” (Schwab, 2017: 114). Se requiere de una infraestructura institucional que mitigue la posible disrupción del avance tecnológico e impulse que se aprovechen las grandes oportunidades.

Finalmente, toca a los individuos, quienes se ven afectados por las decisiones nacionales o globales, a través de su participación y vigilancia constante, organizarse y pugnar por el fortalecimiento de la sociedad civil, así como cuidar la transparencia de aquellas decisiones públicas que tengan consecuencias trascendentes sobre su vida cotidiana. Como afirma Sartori, refiriéndose a la democracia: “Es la mejor máquina que jamás se haya inventado para permitirle al hombre ser libre, y no estar sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros hombres. Construir esta máquina nos ha llevado casi dos mil años. Intentemos no perderla” (Sartori, 2015: 144).

Hemos expuesto los grandes debates en torno a la democracia y explicado cómo este sistema político consiste, en su mínima expresión, en una mera votación numérica acerca de los intereses de los grupos sociales. Se rige por el principio de mayoría, según el cual se considera a todos los ciudadanos como iguales políticamente (aunque no lo sean económicamente). Así, los ciudadanos, en tanto entes racionales, deciden gobernarse a sí mismos a través de sus representantes. La democracia es la toma de decisiones colectiva que se legitima a través del proceso mismo. Por ello, requiere para existir de una serie de condiciones y de instituciones, así como de la participación constante de los distintos actores de la sociedad civil, sin las cuales carece de contenido. En este sentido consideramos que debemos aspirar a una concepción más amplia de democracia, una en la cual dicho concepto se vincule con los de justicia social y redistribución de la riqueza, con la finalidad de conseguir la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Es imperativo subrayar que ha sido en el contexto del Estado-nación donde se ha dado la mayor inclusión de los grupos sociales y, por lo tanto, donde con mayor vigor se han producido los avances democráticos, por ello no compartimos las posiciones que de un plumazo descartan al Estado-nación como una forma concreta de pacto político. Más aún, insistimos en que la desaparición de aquél podría colocar en situación de extrema vulnerabilidad a los grupos más marginados, puesto que serán las corporaciones multinacionales las que ocupen los espacios de poder abandonados por dichos Estados. Por otra parte, un Estado mundial, por su lejanía de la gente y la dificultad de construir una arquitectura de pesos y contrapesos a escala global, corre el riesgo de acumular una excesiva concentración del poder. Más bien, en la actualidad es preferible referirnos a una *gobernanza* mundial en que tanto los actores gubernamentales como los de la sociedad civil atem-

peren las grandes desigualdades y los abusos de los gobiernos y de las transnacionales más voraces.

Si bien, como lo hemos reiterado, la democracia es en la actualidad la forma de gobierno con mayor legitimidad en el mundo, por sus características es también la más vulnerable, ya que incluso es susceptible de degenerar, con relativa facilidad, en un autoritarismo enmascarado por un populismo desenfrenado.

Hoy en día se ha abierto un compás muy amplio para el estudio de la democracia. Su valor normativo finalmente es poco cuestionado, aunque recientemente se ha producido un significativo desencanto respecto de este sistema político. El número de regímenes democráticos aumenta en la comunidad internacional; sin embargo, ya hemos subrayado que no es lo mismo una democracia bien establecida que una en vías de consolidación y con amenazas populistas. De alguna forma, no es tarea fácil determinar el grado de desarrollo democrático de un país, además de que siempre existe la posibilidad de retrocesos.

Hoy más que nunca el tema de la democracia constituye un campo fértil de investigación, por las diferencias y similitudes que muestra en América Latina, Europa y Estados Unidos. También se ha resaltado la relevancia de enfocarse en los estudios regionales para determinar los elementos en común.

Se pueden realizar investigaciones sobre las distintas reglas electorales; por ejemplo, algunos sistemas democráticos cuentan con la posibilidad de reelección inmediata, con la finalidad de no sólo imponer controles sino de crear estímulos para la actuación de los representantes. Sus partidarios argumentan que por el interés de reelegirse los servidores públicos escuchan con mayor atención las demandas de los votantes. El electorado tiene la capacidad de premiar o castigar la actuación de los funcionarios. También se ha argumentado que la reelección automática sólo promueve la concentración del poder, es decir, que el legislador permanecerá más años en el cargo y se alejará de las demandas de sus representados. En este sentido es importante, por ejemplo, profundizar sobre las ventajas y desventajas de la segunda vuelta electoral, así como contrastar las distintas experiencias políticas de los diversos sistemas electorales.

Las democracias consolidadas son cada vez más complejas y se les exigen más condiciones para catalogarlas como tales. Estas distintas características se pueden explorar en cada país. Por ejemplo, resulta fundamental el reconocimiento de los procesos electorales por parte de todos los actores, de for-

ma tal que sus resultados sean aceptados por todos, fundamentalmente por los perdedores. Las elecciones tienen que contar con la posibilidad de que los partidos políticos y los candidatos puedan realizar campañas seguras y estables. Cuando no existe la democracia se persigue, o incluso se elimina, a los partidos de oposición, o en algunos casos se los obliga a subordinarse al partido en el gobierno. Se trata de un esfuerzo consciente y deliberado de desaparecer al enemigo político. Toca a los investigadores explicar estas condiciones y sus variaciones; analizar cómo los distintos sistemas electorales se han ido consolidando, así como detectar las principales amenazas para los regímenes democráticos ya consolidados, sobre todo las que provienen de los actuales movimientos populistas.

Al estudiarse las transiciones a la democracia se pueden ubicar prácticas que la vulneran, como la corrupción o el clientelismo y, en general, es posible explorar por qué no existen o no funcionan los pesos y contrapesos a las instituciones políticas que detentan el poder, de tal forma que se limiten los abusos tanto dentro del gobierno como los que en ocasiones llevan a cabo los grupos de interés más favorecidos. Hoy en día resulta obvio que los procesos electorales deben celebrarse sin violencia, robo de casillas, renunciias de funcionarios electorales y de casilla, o incluso escasa participación de los ciudadanos comunes, pero algo tan evidente no resulta tan claro en una gran cantidad de países. Actualmente se acepta que no son correctas prácticas como la utilización de dinero público para la compra de votos, las grabaciones ilegales, el control de los institutos electorales estatales por los gobernadores, la proliferación de medios de comunicación al servicio de los grupos de interés, las intervenciones presidenciales en las elecciones, y el uso de los programas de apoyo social federales para dirigir y/o coaccionar el sentido del sufragio. Es por todo esto que resulta imperativo profundizar en el peso específico del poder económico, así como en la intervención del llamado dinero oscuro (de dudosa procedencia) en los procesos electorales en los distintos países.

En el caso de Estados Unidos, se produjo un importante retroceso democrático con la decisión de la Suprema Corte conocida como *Citizens United*. La medida permitía que las grandes corporaciones destinaran recursos económicos para las elecciones y se justificaba con el argumento de que limitar el flujo de las aportaciones en dinero era limitar la libertad de expresión.

La experiencia ha probado que la alternancia ayuda a disminuir la corrupción en la medida en que se sabe que habrá revisión de cuentas por parte

del siguiente grupo en el poder. Si bien es primordial el desarrollo transparente de las elecciones en el nivel federal, es absolutamente indispensable mejorar o fiscalizar también los procesos locales. La aplicación irrestricta del derecho es considerada un aspecto fundamental para el funcionamiento de la democracia; por lo tanto, se trata de investigar no sólo si existen leyes electorales en las escalas nacional y locales, sino también si realmente son eficientes los mecanismos para garantizar su cumplimiento.

Un tema sumamente interesante susceptible de análisis es el papel que juegan las encuestas electorales. Generalmente, la realización de encuestas contribuye a validar el proceso, aunque en ocasiones las compañías encuestadoras pueden afectar de una u otra forma la votación. No necesariamente siempre funcionan en el mismo sentido: pueden aumentar la legitimidad del proceso electoral o incluso mostrar que los ciudadanos a veces mienten (voto oculto) al contestarlas sesgadamente por el mero temor de sufrir consecuencias indeseadas; en estos casos las encuestas reducen significativamente su capacidad predictiva. Ése fue el caso en la elección del presidente Donald Trump en noviembre de 2016.

De similar relevancia que el papel de tales encuestas en la formación de la opinión pública y su impacto en la toma de decisiones gubernamentales es el rol que desempeñan los medios de comunicación en la democracia moderna, debido a que se reconoce su intervención como creadores y formadores de una narrativa que muchas veces se torna dominante en el entorno social, con independencia de su objetividad. Una tarea impostergable es, pues, reflexionar acerca de la gran concentración de poder que acumulan las grandes compañías de comunicación, a tal grado que se las ha llamado el “cuarto poder”.

También son muy necesarios los estudios centrados no tanto en los sistemas nacionales, sino en los locales, para comprender qué tan importantes son en la consolidación o no de los regímenes democráticos. El hecho de que diferentes partidos ocupen distintos puestos en el nivel local, cuando el sistema no opera de manera perversa, coadyuva al buen funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales y, en consecuencia, mejora el desempeño de la democracia. Cuando trabaja en forma pernicioso, se presenta una especie de “empate de poderes”, lo cual paraliza los procesos de toma de decisiones, propicia la indefinición de las jurisdicciones, alienta las alianzas con los enemigos tradicionales y, finalmente, ocurre un retroceso democrático (Rebolledo, 2012). Ahora bien, únicamente los estudios específicos pueden

iluminarnos en este sentido. Francis Fukuyama, como ya se mencionó, argumenta que el federalismo se vuelve poco eficiente cuando la sociedad está muy dividida. Cuando no cambian de acuerdo con las nuevas circunstancias, las instituciones no funcionan adecuadamente.

El federalismo ha sido considerado en varias naciones como el más adecuado caparazón de protección para la democracia. Lo es en la medida en que contribuye a distribuir el poder de tal forma que evita su concentración en pocos actores. Se trata de un sistema con múltiples centros de poder, que incluye tomas de decisiones centrales y locales y esferas de responsabilidad separadas para cada unidad del sistema. El propósito de todo esto es que los gobiernos se fiscalicen y vigilen entre sí. El federalismo asume el conflicto, la negociación, la división de poderes, el respeto tanto de las minorías como de la mayoría, ofrece una arquitectura institucional que supervisa a los detentadores del poder y, por lo mismo, facilita la operación democrática. En este sentido, la Unión Europea es un interesante ejemplo de democracia más allá de las fronteras del Estado-nación y de su soberanía. El estudio profundo de la relación entre democracia y federalismo es sin duda un asunto de la mayor relevancia. Lo demuestra, por ejemplo, el caso del Brexit, a través del cual Gran Bretaña salió, desafortunadamente, de la Unión Europea, optando así por un futuro nacionalista y aislacionista en lugar de por una solución federalista, de equilibrio de poderes y de cooperación internacional.

Es fundamental consolidar institucionalmente la exigencia de la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía; por lo tanto, es importante conocer en qué medida y en qué forma los ciudadanos participan en esta labor. En este sentido, es impostergable alentar los estudios acerca de la así llamada “supercarretera de la información” para entender hasta qué grado los ciudadanos están hoy en día mejor informados, así como para incursionar en el conocimiento sobre las posibles nuevas prácticas democráticas que pueden surgir a partir de internet. Asimismo, resulta indispensable profundizar en los impactos negativos que puede traer consigo una plataforma tecnológica como Twitter, que apela a la implantación de un populismo sin límites y que, muy lejos de incentivar las decisiones políticas razonadas, impulsa las respuestas automáticas.

Hemos explicado cómo podemos establecer la existencia de distintos niveles de desarrollo democrático. Obviamente, los problemas que se encontrarán las democracias en cada momento y en los diferentes países son especiales.

Por ejemplo, empezar a instrumentar un sistema democrático es, sin duda, distinto de concretarlo. Hemos descubierto recientemente que aún las democracias consolidadas pueden experimentar retrocesos; es urgente analizar todas estas posibilidades. Será su estudio a nivel empírico lo que nos permita descubrir las similitudes y las diferencias en los avances democráticos y la efectividad o no de las instituciones, así como las nuevas prácticas democráticas y las amenazas populistas, lo que a su vez propiciará la reformulación de las grandes teorías acerca de la democracia. Incluso el régimen democrático estadounidense, que fue el primer experimento político de instauración de la democracia, y por lo tanto uno de los más consolidados, es frágil. A continuación analizaremos dos casos en los cuales este sistema político se puso a prueba.

Las pruebas a la democracia estadounidense en 2000 y 2016

Consideramos que en la época reciente han sido dos los procesos electorales que de alguna manera pusieron a prueba a la democracia de Estados Unidos. En la elección de 2000 todas las proyecciones electorales daban el triunfo al candidato Al Gore. De acuerdo con los llamados “factores fundamentales de las elecciones”, la situación económica que heredaba el presidente William Clinton era muy sólida, con cifras que mostraban un superávit presupuestal y un muy bajo nivel de desempleo; por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos se decantaría por el candidato demócrata. Los resultados fueron muy distintos. Si bien Al Gore ganó el voto popular, George W. Bush obtuvo la mayoría en el Colegio Electoral, en un sistema de elección indirecta, que aún rige en ese país; sin embargo, se cuestionaron por primera vez seriamente las características del proceso electoral, aunque finalmente la arquitectura institucional estadounidense funcionó y los actores políticos aceptaron como legítimo el triunfo del candidato republicano Bush, a pesar de las muchas irregularidades que se comprobaron en la elección.

El segundo proceso electoral que puso a prueba a la democracia de Estados Unidos fue el de 2016. En esta ocasión también el presidente Barack Obama había logrado que el país saliera de una de las peores crisis económicas de que se tenga memoria, además de que los niveles de desempleo también eran muy reducidos, a pesar de que heredó un 9 por ciento de desocupación

de la administración anterior. Por lo tanto, las proyecciones electorales predecían un triunfo certero de la candidata Hillary Clinton. Una vez más la abanderada demócrata ganó el voto popular, pero el candidato republicano, Donald Trump, obtuvo el triunfo en el Colegio Electoral y fue proclamado presidente de Estados Unidos de América.

Lo interesante al analizar estos dos casos es que ambos de alguna manera amenazaron la estabilidad del sistema democrático estadounidense, aunque por distintas razones. En el caso de la elección del 2000 se cuestionó seriamente la legalidad del proceso debido a las muchas dudas sobre el sistema electoral en sí mismo: si bien la ley electoral federal otorga a los estados federados plena autonomía sobre sus sistemas electorales locales, quedó claro en ese momento que existían grandes diferencias entre las cincuenta entidades federadas, pues mientras algunas contaban con sistemas muy avanzados, otras realizaban sus elecciones de una forma realmente muy rudimentaria y con muy escaso cuidado, y en algunos casos los procesos eran excesivamente lentos. En 2000 surgieron dudas acerca de la correcta o indebida utilización de la tecnología en las elecciones; así, se cuestionó la calidad material y la escasa o nula claridad de las boletas precisamente en el estado de Florida, donde se definió la elección. También se llegó a criticar y se debatió con gran preocupación acerca de la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dominada por los conservadores. Por lo tanto, la amenaza provenía de la deficiente práctica de la democracia y de ciertas leyes electorales que debían actualizarse. Ahora bien, a pesar de que ese año rechinó con fuerza el sistema democrático estadounidense, finalmente fue el mecanismo de pesos y contrapesos el que de cierta forma salvó la situación, pues uno de los tres poderes independientes, el Judicial, finalmente tomó la decisión de no continuar con el recuento de los votos, aunque realmente lo fundamental fue la aceptación del candidato Al Gore respecto de esa determinación de la Suprema Corte, quien consideró que a pesar de todo y aunque no estuviera de acuerdo con la misma, era preferible no causar una severa crisis a las instituciones democráticas del país.

En el segundo caso que comentamos, las elecciones de 2016, la principal amenaza a la estabilidad democrática lo ha sido el populismo, surgido de una innegable división de la sociedad estadounidense. También se cuestionó, como en 2000, al sistema político, en la medida en que tras una decisión otra vez de la Suprema Corte, se permitió que entrara mucho dinero ilegal en las

campañas electorales, con lo que fue más evidente el poder de las elites económicas. Además, a través del *Gerrymandering* (la conformación de distritos electorales a modo) se acomodó en muchos de ellos al electorado de tal manera que hubiera una mayor posibilidad de que ganaran los republicanos.

Ahora bien, categóricamente podemos afirmar que es el populismo ya en el poder la circunstancia que puede amenazar seriamente a la democracia estadounidense: el discurso del candidato *antiestablishment*; su crítica ya como presidente a las instituciones gubernamentales, a los jueces, a los organismos responsables de la seguridad, como el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) o la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), e incluso en ciertos casos a militares de alto rango con gran tradición por sus largas trayectorias y amplios conocimientos en la materia; su agria crítica a los medios de comunicación; la creación y defensa de los “datos alternativos”, y su tendencia a mentir y proporcionar datos falsos para fundamentar sus argumentos políticos; la utilización de las llamadas órdenes ejecutivas para evitar negociar las decisiones con las distintas ramas del gobierno, así como sus amagos de declarar una “emergencia nacional” para saltarse la facultad que la Constitución confiere al Congreso de la Unión de ser el responsable de otorgar y etiquetar los recursos económicos del gobierno, para así conseguir la enorme cantidad de dinero que solicita a fin de construir su famoso muro entre su país y México, todo ello constituye una profunda amenaza para la democracia de Estados Unidos. Tendremos aún que esperar para ver si, a la larga, a pesar de todas estas acciones este importante sistema democrático reacciona y se consolida todavía con una mayor intensidad o si, por el contrario, sufre una profunda crisis.

LA ELECCIÓN DE 2000

En el año 2000 tuvieron lugar las elecciones más competidas de la historia reciente de Estados Unidos, además de que, como hemos visto, el proceso electoral mismo fue cuestionado seriamente. Una de las democracias más antiguas y consolidadas del mundo enfrentó una prueba que cimbró su arquitectura institucional democrática. Como sabemos, las leyes electorales son locales, así que toca a los estados definir las reglas y las formas de votación. En el proceso electoral del 2000 se cuestionaron severamente el procedi-

miento de conteo de votos y el diseño de las boletas en el estado de Florida, lo cual pudo llegar a convertirse en una descalificación definitiva de todo el proceso electoral. Finalmente, a pesar de que crujieron con fuerza los cimientos de la democracia estadounidense, su estructura institucional funcionó y el sistema mostró su fortaleza, permitiendo que el cuadragésimo tercer presidente en la historia de la nación, George W. Bush, tomara posesión en los tiempos y la forma establecidos por la ley.

Las lecciones que de este acontecimiento se pueden derivar son, a nuestro entender, la toma de conciencia de que las democracias hay que renovarlas constantemente; que cada voto de los ciudadanos es importante y puede ser decisivo; que el Estado democrático es una coraza que si bien casi siempre muestra fortaleza, también puede ser frágil al grado de llegar a vivir crisis que pudieran ser definitivas. Es indispensable recordar que el verdadero escudo de la democracia no es el trabajo exclusivo del gobierno, sino el de todos los actores políticos. Asimismo, si realmente creemos en las virtudes democráticas debemos, como ciudadanos, no sólo gozar de sus beneficios sino también cumplir con nuestras obligaciones, que es lo que, en última instancia, permite proteger con eficacia a sus instituciones.

Las elecciones en Estados Unidos son la piedra angular, la esencia, de su sistema democrático. Es justamente a través de las elecciones periódicas como la sociedad refrenda su contrato social. Por medio del proceso electoral se elige a los candidatos que ocuparán los puestos fundamentales del sistema gubernamental por periodos predeterminados. Aunque a través de una amalgama de prácticas políticas cotidianas los actores sociales renuevan día con día la legitimidad del gobierno, sin duda son las elecciones el proceso de mayor relevancia para hacerlo. Sólo por medio del triunfo electoral un grupo político concreto, representado por un partido político, puede obtener la suficiente legitimidad para gobernar. Precisamente esa legitimidad es la condición necesaria que lo faculta para implementar las políticas públicas.

Desde los años setenta del siglo xx es posible observar en Estados Unidos una gran apatía respecto de las elecciones. La muy baja participación electoral se ha intentado explicar a partir de una gran variedad de posibles causas, entre otras, la amplia aceptación del sistema político tal como está, es decir, la muy importante confianza de la ciudadanía estadounidense en cualquiera de sus dos principales partidos y en sus respectivos candidatos para los puestos de elección popular. En sentido contrario, este fenómeno de baja

participación también se ha explicado por el desencanto ciudadano por la política, el cinismo ideológico, un electorado esencialmente insatisfecho con las campañas políticas concebidas como estrategias de venta de productos comerciales, una cada día más evidente desilusión por los partidos políticos, etcétera. Por una combinación de algunas de estas causas, y quizá por otras menos visibles, se presentó una históricamente baja participación en las elecciones del cambio de milenio.

Los estadounidenses tenían demasiada confianza en su democracia y olvidaron que siempre hay amenazas que la rondan, por más consolidada que parezca. Un gran número de ciudadanos pensaron que su voto no marcaría la diferencia entre millones de sufragios y, no obstante, por primera vez desde hace mucho tiempo, se demostró que cada voto fue decisivo. 65 por ciento de los electores potenciales no votaron y, probablemente, se arrepintieron por no haber participado en un proceso tan interesante y competido, sin duda cobrando conciencia de que un solo voto, el suyo, pudo ser el definitivo. En competencias tan cerradas como la del 2000 es cuando cada voto expresa su inconmensurable valor y la participación individual se torna fundamental.

En los inicios de proceso electoral para la Presidencia de Estados Unidos, al inaugurarse el siglo XXI, se avizoraba el mejor de los escenarios posibles. La economía se encontraba en constante crecimiento, se habían logrado tres años consecutivos de superávit presupuestal, el desempleo estaba en los niveles más bajos y no había tenido lugar ninguna crisis internacional mayor. Por otra parte, el presidente Clinton había logrado salir victorioso del juicio de desafuero (*impeachment*) que quisieron aplicarle los republicanos por sus escándalos sexuales. Todo futurólogo electoral apostaba a que el candidato demócrata Al Gore sería el nuevo presidente, pues, ya alcanzado el bienestar económico, supuestamente sólo restaba postular a un candidato “moralmente impecable”, lo cual garantizaría una abrumadora votación en su favor. Al Gore tenía esa imagen de moralidad intachable, por lo que, aparentemente, ya nada ni nadie lo detendría.

Éste fue el escenario que se observó en un principio como el más probable, por lo que se consideró que se trataría de una elección fácil, y tal vez por ello muchos decidieron no salir a votar; sin embargo, la primera elección presidencial del siglo XXI resultó ser la más problemática en la historia reciente de Estados Unidos. La “estrategia de campaña” de Gore consistió en alejarse del presidente Clinton para que no lo asociaran con su muy cuestio-

nado comportamiento moral; no obstante, al final esa distancia resultó fatal; la estrategia falló, pues el candidato se apartó también de los exitosos resultados económicos de su correligionario y, en consecuencia, del motor mismo del elector estadounidense: el bolsillo. La imagen que se transmitía de Al Gore era distante y rígida. Por su lado, el candidato republicano logró establecer un récord de financiamiento, al reunir los mayores apoyos económicos para una campaña presidencial en la historia de su partido.

Las elecciones se desarrollaron normalmente hasta que los primeros reportes mostraron un empate técnico. La competencia era tan cerrada que durante la noche, al recibirse paulatinamente la información de los estados, el resultado electoral cambiaba constantemente de un posible vencedor a otro, y la noche terminó sin un ganador oficial. Además, la decisión se fue cerrando en los estados del Este, en particular en uno cuyo proceso electoral fue especialmente lento y opaco. El estado de Florida, gobernado nada menos que por Jeb Bush, hermano del candidato republicano, quedó como el fiel de la balanza y la fuente más importante de incredulidad y de serio cuestionamiento de la elección.

Se presentaron principalmente dos tipos de alegatos: el primero, que la perforación de la boletas electorales no fue realizada correctamente por las máquinas correspondientes, razón por la cual no se había contado la totalidad de los votos que correspondían a uno u otro candidato (en forma mayoritaria no se habían tomado en cuenta los que se marcaron en favor del demócrata); también se argumentaba que en algunos casos no resultaba clara en las boletas la intención del voto. Precisamente el hecho de que el desaguisado hubiese ocurrido en el estado gobernado por el hermano del candidato republicano hacía que todo el proceso se percibiera como todavía más sospechoso.

De forma repentina, se encontraron en duda ya no sólo los resultados en Florida, sino en varios otros estados donde el conteo fue similar. Si bien es cierto que existen leyes electorales federales que se aplican a nivel nacional, en materia de organización electoral son los estados, con sus propias leyes locales, los que deciden la forma en que se llevan a cabo las elecciones en su territorio, por lo que la situación no era nada fácil. Fue también esta circunstancia la que contribuyó a magnificar el riesgo de crisis que por unas semanas enfrentó el sistema político-electoral de Estados Unidos. Cuestionar a un solo estado podría conducir a una severa crítica a la elección presidencial como un todo. Al final, Bush ganó sólo con el voto del Colegio Electoral, pues Al

Gore fue el vencedor en la votación popular. En otras circunstancias, este hecho habría permitido augurar una presidencia débil; sin embargo, sólo hay que recordar que George Walker Bush es el primer presidente republicano en décadas que ha gozado, en sus primeros años de mandato, de una Cámara de Representantes ampliamente dominada por el Partido Republicano y de un Senado, que aunque estaba prácticamente empatado entre las dos fuerzas políticas dominantes, también tenía un tinte republicano gracias al voto de calidad del vicepresidente de Estados Unidos, al mismo tiempo presidente del Senado *ex officio* en el sistema político estadounidense. Esta situación cambiaría algunos meses después por la defección de un senador republicano.

Probablemente la mayor habilidad del expresidente Clinton haya sido su pragmatismo político: ni liberal ni conservador, y fue precisamente esta posición intermedia la que logró en su momento recuperar el voto demócrata. Justo este centro ideológico que fijó el Consenso de Washington para el exterior fue generando una división a nivel interno en Estados Unidos. De hecho, este fenómeno significó que la elite política dio un giro hacia el mencionado Consenso, eliminándose ampliamente las diferencias de tipo ideológico en la política. Más aún, si recordamos las campañas en 2000 de los entonces candidatos George W. Bush y Al Gore podríamos darnos cuenta de que resultaba muy difícil diferenciar sus agendas y objetivos políticos; incluso parecía que pertenecían al mismo instituto político. Mientras que ambos partidos se acercaban al centro y pugnaban por el neoliberalismo económico expresado en el Consenso de Washington y el neoconservadurismo en política exterior, comenzaba a gestarse un gran movimiento social que se alejaba de las elites políticas y del *establishment*. Toda esta estructura sociopolítica se expresó en unas elecciones muy cerradas, fruto en realidad de una sociedad profundamente dividida y desencantada de las elites políticas, fenómeno social que no se expresaría con furia sino hasta las elecciones de 2016.

Frente a las discusiones e impugnaciones de algunas votaciones específicas, las cortes locales, dominadas en su mayor parte por los demócratas, propusieron la realización de recuentos. Al final tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia (dominada por los republicanos), institución que decidió por siete votos contra dos que el recuento manual de votos violaba la Constitución, al no otorgarse el mismo tratamiento a todos los sufragios por igual. La decisión definitiva, por cinco votos contra cuatro, estableció que ya era muy tarde para intentar mejorar la calidad del conteo y para cualquier otra

acción de tipo electoral en Florida, lo que automáticamente otorgó el triunfo a George W. Bush. Sabemos bien que las elecciones en Estados Unidos no son directas. Bush ganó, finalmente, con el voto del Colegio Electoral, pero perdió la votación popular, es decir, obtuvo menos sufragios totales que su contrincante demócrata.

Si bien es cierto que tradicionalmente la Suprema Corte de Justicia no interviene en asuntos electorales y que la de noviembre de 2000 era una situación muy delicada, también lo es que, a pesar de todo el sistema contó con una instancia democrática que logró destrabar el proceso. Es interesante apuntar que ambas posiciones, la de los demócratas y la de los republicanos, esgrimieron sus argumentos siempre con el telón de fondo de la defensa de la democracia. Los primeros alegaban que era necesario contar debidamente cada voto y considerar los errores, pues lo más importante era respetar la voluntad real de los ciudadanos. Los segundos respondían que los tiempos electorales debían acatarse sin la más leve alteración, también conforme a las reglas de la democracia estadounidense. Al Gore aceptó la derrota sólo después de conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de la “feliz” solución, nadie podía ni puede soslayar los serios problemas que enfrenta el sistema electoral de Estados Unidos. Esta preocupación se sintió rápidamente y el Congreso respondió proponiendo una nueva ley electoral. El 29 de octubre de 2002, el presidente Bush firmó la Ley Ayuda a Estados Unidos a Votar (*Help America Vote Act*, HAVA) aprobada por noventa y dos votos contra dos en el Senado y por trescientos setenta y cinco contra cuarenta y ocho en la Cámara de Representantes. Los debates legislativos y las discusiones entre los diversos actores sociales y políticos tardaron dos años para llegar a una propuesta final. Con un espíritu bipartidista, la ley pretende lograr un equilibrio entre la muy probable intención de cada partido de expandir su votación, acercándose sobre todo a los nuevos inmigrantes, y el deseo de todos de prevenir fraudes en las casillas.

La HAVA creó la Comisión de Asistencia Electoral o Election Assistance Commission (EAC), que estableció requisitos de administración electoral que incluyen muchos mandatos para los gobiernos locales y estatales, pero sin quitarles el poder de controlar las elecciones a los estados. Lo que sí hizo fue crear un estándar mínimo en materia de conteo y cómputo electorales para prevenir disputas similares a las que tuvieron lugar en las elecciones de 2000. Se justifica en tanto se cree que el votante tiene el derecho a confiar

en que el sistema es justo y que las elecciones son transparentes; en que cada voto se cuenta y se registra y en que las reglas se aplican consistentemente. Según esta nueva ley, por ejemplo, si una persona no está en el padrón de electores se le autorizará a votar provisionalmente, con la salvedad de que los funcionarios electorales locales y estatales deberán confirmar posteriormente si contaba o no con ese derecho. Si verifican que sí está registrada en el padrón electoral su voto será válido; de lo contrario será anulado. En el ámbito penal, la ley también incluye la aplicación de penas para quienes proporcionen, fabriquen o difundan información falsa. Durante la jornada electoral, los funcionarios de casilla deberán preguntar a quienes no aparezcan en las listas locales si son o no ciudadanos estadounidenses, ya que de acuerdo con la Ley Electoral de 1996 sólo estos últimos podrán votar en las elecciones federales.

La Comisión de Asistencia Electoral ejerce funciones gubernamentales de naturaleza ejecutiva, entre las cuales destacan la de probar y garantizar el buen funcionamiento del equipamiento electoral y resguardar la información electoral. Esta Comisión debe informar cada año al Congreso acerca de los avances en la adopción e implementación de los estándares mínimos aceptados voluntariamente por los estados en materia de organización electoral. También otorgará permisos, cuando los estados lo justifiquen plenamente, para retrasar los cambios necesarios para reemplazar los sistemas electorales anticuados. Algunos confían en la Comisión y otros consideran que es ineficiente. De hecho, no tuvo quórum de 2012 a 2015 (Burriss y Fischer, 2016).

De gran relevancia son los 3.9 billones de dólares del presupuesto federal que se asignaron para ayudar a los estados a sustituir los obsoletos equipos con que se tenía que perforar las boletas. Asimismo, los recursos también se destinaron a programas de entrenamiento para los encargados de las casillas, quienes ahora cuentan con computadoras que contienen el listado de todos los votantes registrados. También se diseñaron programas de educación cívica para los estudiantes.

El senador Christopher J. Dodd, demócrata por Connecticut, fue el principal promotor de la ley, a la cual calificó como “la primera carta de derechos humanos del siglo XXI”. Entró en vigor gradualmente, primero a lo largo de 2003 y 2004, y algunos de sus preceptos hasta 2007. Su intención principal no es solucionar todos los problemas, pero sí ayudar a evitar grandes percances, como los sufridos en Florida en 2000.

Conocemos los estudios sobre el individualismo racional emprendidos por connotados sociólogos contemporáneos, los cuales han llegado a la conclusión de que es irracional votar, en la medida en que podemos gozar gratuitamente (ser *free-riders*) de los beneficios del bien público sin tener que molestarnos en hacerlo. ¿Qué puede significar nuestro voto entre millones de sufragios, si de todas maneras vamos a gozar de las ventajas de vivir en un país democrático, pues otros millones de ciudadanos sí cumplirán con su obligación cívica? Sin embargo, son situaciones como las que se dieron en 2000 las que nos recuerdan lo importante que puede resultar el voto de cada uno de los ciudadanos y cómo la escasa participación ciudadana puso en riesgo a la democracia más antigua del hemisferio. Ésta fue una lección no sólo para Estados Unidos, sino para todos los países que sostienen a la democracia.

LA ELECCIÓN DE 2016

Las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, en noviembre de 2016, pusieron otra vez en entredicho el funcionamiento del sistema político estadounidense (Márquez-Padilla, 2018b), y sólo pueden comprenderse en el contexto de un marco explicativo más amplio que considere los movimientos populistas que se han generado en Europa, como consecuencia de una situación económica en que se puede observar una gran concentración de la riqueza.

Existe una raíz profunda que unifica a estos movimientos: la migración mundial. Si bien es cierto que los motivos de los flujos migratorios son diferentes para Europa y para Estados Unidos, también lo es que todos tienen una causa central, que es la violencia. Es decir, por las constantes guerras y/o el hambre en los países árabes y en África se producen amplias migraciones hacia Europa. Por violencia y por hambre se originan también los movimientos migratorios hacia Estados Unidos y Canadá en el continente americano.

Paradójicamente, al tiempo que se impulsaba la abolición de las fronteras virtuales con la globalización y la revolución de internet, que intensificaban la interconexión entre países, también se empiezan a construir murallas o a diseñar otros mecanismos de supervisión y de seguridad nacional para reestablecer las fronteras territoriales. En Europa se han construido muros o rejas en Hungría, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia, entre otros de los treinta

y cinco países afiliados a la Unión Europea (Bremmer, 2018b: 117). En Estados Unidos, el presidente Trump no sólo ya firmó una orden ejecutiva para continuar con la construcción del muro fronterizo entre su país y México, que fue su gran promesa de campaña, apoyada por el 70 por ciento de su base electoral, sino que ha buscado por todos los medios, sin casi ningún éxito hasta ahora, destinar recursos presupuestales exorbitantes para tal propósito.

Después de la guerra fría, con la euforia de la globalización, se pensaba en consolidar regiones en franca cooperación, que compartían intereses y beneficios, al tiempo que resolvían conjuntamente problemas globales que trascienden las fronteras. También se pensaba en las soberanías compartidas, como en el gran experimento político de la Unión Europea. Ante todo este panorama también comienza a generarse una reacción de los movimientos populistas, que reclaman el retorno de sus fronteras y sus soberanías. En Inglaterra, por ejemplo, se votó por abandonar la Unión Europea y ganó el Brexit, para sorpresa de todos. Recientemente, los partidos de la derecha populista han adquirido gran importancia en varias naciones del continente europeo: en Italia, la Lega Nord y Forza Italia han ganado varias elecciones locales, así como el Movimiento de las Cinco Estrellas, de Giuseppe Grille, apoyó a Geert Wilders, del PVV (Partido de la Libertad) en los Países Bajos; en Francia la nacionalista de derecha Marie Le Pen consistentemente gana más simpatizantes. Por último, en Polonia y en Turquía se establecieron gobiernos autoritarios. El avance de la democracia, que parecía no tener rivales, inicia un claro retroceso:

Los trabajadores en todas partes temen la pérdida de sus trabajos y la reducción de sus salarios, ocasionados por una cambiante economía global y por las transformaciones tecnológicas que los dejan rezagados. Los ciudadanos le temen a las crecientes olas de extranjeros que alteran el rostro y la voz de los países que ellos conocen. Les temen a los terroristas y los criminales, que matan por razones que nadie entiende. Piensan, además, que sus gobiernos no pueden o no quieren protegerlos (Bremmer, 2018a: 1).

Después de la segunda guerra mundial, la elite económica y política mundial de Occidente estableció el modelo económico de la globalización y del libre mercado entre los Estados-nación; también la democracia como arreglo político. La idea detrás de este modelo de desarrollo era que en la medida en que los países intensificaran sus relaciones comerciales serían

menos proclives a involucrarse en guerras; más aún, se pensaba que se promovería la cooperación y se mitigaría el conflicto.

Sin duda este modelo ha traído grandes beneficios para el mundo, pero también ha implicado grandes costos. Si bien la pobreza se ha reducido en términos porcentuales, ha aumentado en números absolutos en tanto que la población mundial ha crecido mucho. Y al mismo tiempo, lo que resulta aún más preocupante, es que se ha producido una gran concentración de la riqueza. Ciertos países son los que más ventajas han obtenido con la globalización, pero también a nivel interno se ha dado esta desmedida acumulación de los recursos. Desafortunadamente no se construyó una gobernanza internacional que moderara a las grandes corporaciones multinacionales. Por ello, los Estados-nación se encontraron con poca fuerza *vis-à-vis* estas grandes corporaciones globales. Comenta Richard Haass: “La globalización con sus vastos y rápidos flujos, de casi cualquier cosa y de todo lo real e imaginable, a través de las fronteras, es una realidad que los gobiernos muchas veces no pueden monitorear y menos manejar” (Haass, 2017: 11). Tampoco a nivel interno se establecieron políticas redistributivas que ayudaran a mitigar los excesos del libre mercado mediante el reparto, en forma más o menos equitativa, de los privilegios de la globalización.

Si bien es cierto que las elites políticas y económicas mundiales apoyaron los grandes tratados comerciales, no se generó este mismo entusiasmo y apoyo por parte de las masas. Los acontecimientos que siguieron a la firma de estos tratados globales y regionales generaron miedo, inestabilidad y un sentimiento de vulnerabilidad ante los grandes cambios suscitados. Aunque las elites y las masas compartían, hasta cierto punto, la misma visión del mundo y del futuro, las transformaciones económicas trajeron consigo una gran división acerca de qué caminos elegir. Esto abrió la posibilidad de que surgieran, como hemos dicho, los movimientos populistas, los cuales, sostiene Judis, “muestran que la ideología política existente no está trabajando bien y necesita replantearse, y que la visión del mundo estándar se está desdibujando” (Judis, 2016: 17).

Al mismo tiempo que se eliminaban los obstáculos económicos y se eximía de impuestos a las grandes corporaciones, se carecía de una gobernanza internacional que frenara los abusos de las empresas multinacionales y no se tejían redes de apoyo para los grupos y segmentos perdedores de la globalización. Mientras que las soberanías se debilitaban y con ellas los Estados-nación,

las firmas transnacionales acrecentaban su poder. Como resultado, Picketty (2014), Chomsky (2016) y Stiglitz (2012) denunciarían la excesiva concentración de la riqueza en el 1 por ciento de la población mundial: así, si en 1970 ese 1 por ciento tomaba para sí el 8 por ciento de los beneficios de la economía, para 2010 ese porcentaje creció vertiginosamente hasta alcanzar el 18 por ciento de las ganancias económicas (Picketty, 2014). De acuerdo con Ian Bremmer, los ricos no van a ser capaces de persuadir a quienes luchan por sobrevivir en estas nuevas economías de que esos dividendos son el resultado de sus grandes talentos (Bremmer, 2018a: 27).

Sin duda, fue la crisis financiera mundial del 2008 la circunstancia que puso al descubierto la cara fea del capitalismo global. La desregulación financiera provocó que los abusos en la economía llegaran a niveles inenarrables e inaceptables, al tiempo que la revolución tecnológica permitía a los ciudadanos ser testigos del derroche descarado de las elites. Por otro lado, el capital se concentró en las inversiones financieras de alto riesgo, sobre todo en los llamados productos derivados, que pusieron en riesgo a todo el sistema. Se supo posteriormente que los operadores de finanzas manipularon los valores de la bolsa.

Todo esto sucedió al mismo tiempo que se decretaba una reducción de impuestos en Estados Unidos, que lejos de promover la inversión para la creación de fuentes de trabajo, objetivo con el que se justificaba dicha política fiscal exclusiva para el 1 por ciento de los habitantes, lo que fomentó fue una mayor concentración de la riqueza y la formación de enormes monopolios. Muchos de los grandes capitalistas simplemente no impulsaron nuevas industrias que generarían empleos, como argumentan los neoliberales, sino que más bien compraron negocios ya establecidos que les permitieron consolidar monopolios en las ramas que les interesaban. Algunos también realizaron enormes inversiones en el sector especulativo de la bolsa de valores, con lo cual no apoyaron el desarrollo industrial y de los servicios, sino a la economía virtual, especulativa, ficticia.

La crisis financiera mostró claramente que los costos y los beneficios de la cooperación social no se reparten en forma equitativa, sino que los segundos se acumulan en el 1 por ciento privilegiado de la población y son los trabajadores y las clases medias quienes terminan pagando las enormes cuentas. En su afán de obtener ganancias descomunales, los bancos realizaron una gran cantidad de grandes préstamos, sin hacer las necesarias investigacio-

nes para conocer la capacidad económica real de las personas. Esto orilló a que muchos deudores no pudieran pagar sus hipotecas, pues además subieron los intereses. Los estadounidenses comunes firmaron contratos con los bancos que difícilmente entendían, y resultaron los grandes perdedores, porque no sólo perdieron sus hogares, lo que provocó que se desplomaran los precios de las propiedades urbanas y que, por lo tanto, sus casas ya no valieran lo mismo y no fueran suficientes ni siquiera como garantía para sus deudas, sino que estas últimas tendieron a crecer, hasta volverse impagables.

La clase media y los trabajadores fueron los mayores afectados por la gran crisis financiera. Son quienes realmente sufrieron sus consecuencias devastadoras, mientras los ejecutivos bancarios gozaban de sus desmedidos bonos: “Donald Trump no creó la vulnerabilidad sino que la explotó [...]. La irresponsabilidad de las élites estadounidenses, la arrogancia de los líderes de los partidos, el aislamiento de los ricos, esos y más fueron los recursos utilizados por Trump en su camino al poder” (Frum, 2018: 13).

En Estados Unidos, la globalización sobre todo afectó al trabajador industrial blanco, como lo hemos explicado, pues significó cierre de fábricas que más tarde se abrían en lugares como México y China, donde los salarios son más bajos. Ahora bien, la razón principal de la acelerada pérdida de empleos fue la revolución tecnológica, que avanza a pasos agigantados y provoca despidos masivos debido a la automatización de los procesos productivos, mayoritariamente en los estados de la región conocida como el *Rust Belt* (cinturón del óxido o industrial), donde se concentran las industrias extractivas. Jeremy Rifkin lo explica así: “La ironía es que la fuerza de trabajo industrial convencional de la primera mitad del siglo XXI va a ayudar a crear una infraestructura inteligente para un nuevo sistema económico que en la segunda mitad de la centuria va a eliminar los mismos trabajos industriales que la construyeron” (Rifkin: 2011: 264).

Las máquinas, según Rifkin, son más eficientes que los hombres, es decir, realizan mucho mejor los mismos trabajos. Además, es más barato mantenerlas que los salarios incluso bajos que se les pagan en algunos países a los trabajadores. De esta forma, advierte este autor, para ser más productivas y más competitivas, las empresas entran en una tendencia inevitable mediante la cual la tecnología inteligente sustituye al trabajo humano (Rifkin, 2011). Es en esta temática en la que deberíamos de enfocar nuestros análisis con creatividad, a fin de aprovechar el desarrollo tecnológico para el bien social y para

evitar que el predominio descontrolado de la tecnología “inteligente” nos aplaste y provoque grandes perturbaciones sociales.

Lo anterior sucedió concretamente en estados como Ohio, Michigan y Wisconsin, algunos de los llamados “estados pendulares” (*swing states*), debido a que sus electores cambian constantemente sus preferencias partidistas de una elección a otra. Paradójicamente Donald Trump, un miembro de la elite económica de Estados Unidos, le robó su narrativa populista a los demócratas, pues eran ellos quienes tradicionalmente lideraban los discursos antiinmigración y contra los tratados comerciales, en tanto que sus bases partidistas las conformaban los grandes sindicatos estadounidenses. Estos últimos generalmente se manifiestan en contra de la migración, pues consideran que afecta el nivel de vida de sus miembros, ya que contribuye a la reducción salarial, al producirse un importante desequilibrio entre la oferta y la necesidad real de trabajadores, la demanda. Por su parte, los tratados comerciales son percibidos por muchos ciudadanos como acuerdos que sólo promueven inversiones en países diferentes de Estados Unidos.

Sin duda, tanto las elites dirigentes del Partido Demócrata, como las del Republicano, fueron poco sensibles a este fenómeno que experimentaban los trabajadores industriales blancos, protestantes y de mediana o avanzada edad, que se encontraban desempleados. Trump tomó nota de sus ansiedades y enojos, pero dándose cuenta de que tenía que alejarse en un asunto importante de la retórica tradicional de los republicanos: tenía que defender la seguridad social y el programa de salud Medicaid si quería obtener las simpatías electorales de este segmento. No le convenía, como regularmente lo hacía el Partido Republicano, buscar reducir estos beneficios de las clases media y trabajadora.

Este descontento se empezó a manifestar abiertamente, como ya lo mencionamos, desde el surgimiento del llamado Tea Party, organizado cuando Barack Obama llegó a la Presidencia. Se trata de un movimiento social y político que fue patrocinado económicamente por los hermanos Koch, miembros de la elite empresarial y políticos de extrema derecha, quienes además le dieron gran difusión a través de la cadena de televisión Fox, de la cual son copropietarios, así como por el multimillonario Robert Mercer. Un sentimiento de descontento que en principio fue reducido y muy local, y que realmente no parecía alcanzar para conformar un partido político, fue presentado como un gran movimiento nacional y promovieron su crecimiento. Los empresarios

apoyaban directamente las finanzas de los candidatos del Tea Party, quienes casi siempre se aliaron con los republicanos en candidaturas comunes.

El “Partido del Té” tenía una ideología populista que contaba concretamente con dos objetivos principales: la eliminación y/o reducción de impuestos y la oposición a cualquier tipo de inmigración. De acuerdo con ellos, los migrantes ocupan las prestaciones y servicios sociales del Estado benefactor y, en consecuencia, los impuestos se elevan; asimismo, según su óptica la sobrecarga de demandas de ayuda social por parte de los migrantes pone en riesgo la estabilidad y seguridad social futuras que legalmente son derechos de los trabajadores nativos blancos.

Steve Bannon, quien fuera uno de los principales asesores en la campaña electoral de Trump, además de un convencido conservador, populista, nacionalista, ejecutivo de Breitbart News, un portal electrónico de noticias catalogado como racista y populista, que cree firmemente que el populismo de derecha al estilo del Tea Party es un fenómeno global (Green, 2017: xi), ha sido considerado el ideólogo detrás del nacionalismo populista. De forma similar a los fascistas italianos, Bannon considera que el valor social más importante es la cohesión del grupo, su cultura, su sangre, su pertenencia a un territorio; no los individuos (Pinker, 2018: 448). De acuerdo con esta forma de pensar, la propia evolución natural de la humanidad selecciona a los mejores grupos para dirigir sus destinos. Para este ideólogo de la derecha estadounidense, el ser humano no es un ente cosmopolita sino que pertenece a una nación específica: “Para una nación subordinar sus intereses a acuerdos internacionales significa abdicar a su derecho natural a la grandeza; implica también una condena a convertirse en un jugador más en la competencia global de todos contra todos” (Pinker, 2018: 448). El líder es quien representa directamente el alma del pueblo, sin necesidad del aparato administrativo del gobierno. Los estándares morales que debe dictar son los del cristianismo, aunque conforme a este neoconservadurismo. Solamente el líder puede restaurar la edad de oro donde dominaban estos valores religiosos. Debe erigirse como un dirigente con una campaña nativista, aislacionista, racista, que tenga resonancia en una época de estrés económico y social, cuando es escasa la confianza en el gobierno y las expectativas de las clases medias se han frustrado (Meachan: 2018: 4).

Fue el candidato Trump quien, asesorado por Bannon, escuchó y entendió este descontento. El resultado fue que el 66 por ciento de los hombres

blancos sin o con escasa educación votaron por él (CNN, 2016a). También lo hicieron el 41 por ciento de las mujeres, sin distinciones de raza, edad o condición social. Y sobre todo, quienes más lo apoyaron fueron los estadounidenses mayores de cincuenta años de género masculino (CNN, 2016a). Al mismo tiempo que se sentían desplazados en términos económicos, estos segmentos poblacionales también se creyeron amenazados por los intensos cambios culturales. Los habitantes de muchos de los estados más centrales y del norte de Estados Unidos empezaban a tomar conciencia de las migraciones de México y América Central, hasta antes desconocidas para ellos. Desafortunadamente, el politólogo Samuel Huntington formuló un fuerte argumento, aunque muy cuestionable, que presentaba a la población mexicana, que pugnaba entre otras cosas por la defensa del idioma español y por la educación bilingüe dentro del territorio estadounidense, como una seria amenaza para la identidad cultural de la población blanca, anglosajona y protestante de ese país (Huntington, 2004). A diferencia de otras minorías que sí pudieron asimilarse a su nuevo entorno, y que aceptaron el inglés como la única lengua de Estados Unidos, la migración mexicana desafió uno de los factores fundamentales de la identidad de los estadounidenses, al pretender que el español gozara de algunos privilegios de idioma oficial. Según Huntington, llegó incluso a significar una amenaza más fuerte que la reacción de la civilización musulmana en contra de Estados Unidos y sus valores. Al ser la primera minoría, y si tomamos en cuenta su mayor índice de crecimiento con respecto al de la población en su conjunto, algunas predicciones demográficas apuntaban a que se convertiría en la mayoría para 2050. Por ser la población hispana, insistimos, la minoría más grande y con las mayores tasas de natalidad de acuerdo con datos obtenidos del censo estadounidense, se percibió como una verdadera amenaza para la hegemonía de la población blanca de Estados Unidos, hasta ahora la mayoritaria (United States Census Bureau, 2016).

Huntington, a quien podemos catalogar como un pesimista pragmático, confiere gran importancia a la cultura en el análisis de las relaciones internacionales. En este sentido, de alguna forma subyace en sus teorías la premisa de que existen culturas con un mayor valor que otras, o por así decirlo, culturas más desarrolladas. En su libro clásico, *The Clash of Civilizations* (1996) nos presenta una hipótesis según la cual las civilizaciones tienen distintos valores y, por lo tanto, se enfrentarán entre sí; en particular vislumbra la ame-

naza musulmana. Advierte a Estados Unidos sobre los riesgos de pretender imponer sus valores a la civilización musulmana, porque puede darse una reacción vigorosa en contra de esa imposición.

Este autor argumenta que existe una estructura profunda en la civilización occidental que inevitablemente dirige a sus sociedades hacia la democracia. Subraya, no obstante, que el papel de los líderes políticos es fundamental debido a que son ellos los que facilitan que la democracia avance, mientras que los malos dirigentes permiten que las sociedades en las que actúan experimenten retrocesos en la ola democratizadora. También postula este reconocido filósofo político que aunque son ciertos los peligros externos que acosan al sistema democrático de Estados Unidos, quizá resulte todavía más preocupante la amenaza interna que significa el auge del multiculturalismo asentado en su sociedad (Huntington, 2004). Argumenta que el “credo estadounidense” tiene sus orígenes en los colonos británicos protestantes y define a la identidad estadounidense por su cultura y sus creencias religiosas (Huntington, 2004: 1).

Ahora bien, no está de más reiterar que una de sus principales preocupaciones es el enorme riesgo que para él significa la migración mexicana. De acuerdo con su análisis dicho flujo migratorio es distinto de todos los anteriores en la medida en que busca, como lo mencionamos con anterioridad, conservar su idioma, su cultura y sus valores. Esto implica para este pensador un indiscutible rechazo a lo que significa ser estadounidense, con su credo bien establecido: la lengua inglesa, el compromiso religioso, el imperio de la ley, el respeto de la propiedad privada, un profundo individualismo, una ética del trabajo y la firme creencia de que hay que ganarse el cielo aquí en la Tierra. Su preocupación principal es que la migración proveniente de México sí es un riesgo real para la integridad cultural y política de su país (Huntington, 2004).

Explica que esta migración es también diferente por muchas razones, entre ellas: la contigüidad geográfica, su tamaño, su condición de ilegalidad, la concentración regional, su persistencia y su presencia histórica. Todos estos factores, piensa, dividirán a la larga a Estados Unidos en dos sociedades, con dos lenguas y dos culturas fundamentalmente distintas que competirán por la definición de la identidad del país.

Si bien utiliza datos muy cuestionables y parte de sólo un ejemplo para hacer sus grandes generalizaciones, y con ello darle fuerza a su argumento, sí consiguió introducir en las narrativas locales la idea de que más que la civili-

zación musulmana, la inmigración de mexicanos está creando una sociedad alterna dentro de Estados Unidos, lo cual necesariamente ocasionará un choque entre las dos sociedades.

Los grandes cambios culturales recientes: por ejemplo, la aceptación del matrimonio homosexual, el fortalecimiento del derecho al aborto, la legalización del uso de la marihuana, el establecimiento de baños comunes para personas transgénero y el crecimiento de la influencia del multiculturalismo afectaron directamente sobre todo el modo de vida y las convicciones profundas de la población blanca, poco educada, compuesta en su mayoría por trabajadores industriales, granjeros y agricultores; sin embargo, según Ian Bremmer, todos estos nuevos valores están siendo seriamente cuestionados en Estados Unidos (Bremmer, 2018a: 25).

Steve Bannon y los conservadores siempre estuvieron en contra de todos estos cambios, los cuales, según ellos, ponían en riesgo la supervivencia misma de la civilización occidental. Aunque no sólo eso les preocupaba. Abiertamente declaraba Bannon que los musulmanes eran los grandes enemigos de Occidente. Estableció tres prioridades cuando fungía como el principal asesor político de la Casa Blanca: 1) seguridad nacional y soberanía; 2) una economía nacionalista y 3) la deconstrucción del Estado administrativo (Goldberg, 2018: 188).

Al postularse la necesidad de “ser políticamente correctos”, como los liberales lo exigían, en realidad se limitaba el derecho a la libre expresión de los conservadores, que estaban en contra del liberalismo secular. Bannon encontró en el billonario Robert Mercer el apoyo económico para respaldar a Donald Trump, ya que la intención de ese ideólogo y propagandista conservador era transformar la política estadounidense. Mercer contribuyó a financiar la expansión de Breitbart News en Londres y Texas para promover su narrativa conservadora antiglobalización: “La familia Mercer no fue el principal donador, pero sí fue sin lugar a dudas el más importante en ayudar a Trump a ganar la Presidencia” (Green, 2017: 131).

Lo anterior también tuvo consecuencias para los demócratas. De alguna manera las elites del partido crearon una narrativa demasiado liberal, olvidándose de sus bases, lo cual nos ayuda también a explicar el fracaso de Hillary Clinton, quien dejó al margen de sus discursos al segmento de trabajadores blancos que tradicionalmente votaba por la opción demócrata. En noviembre de 2016, fueron las minorías las que sufragaron en favor del Partido

Demócrata: 89 por ciento de los afroamericanos, 66 por ciento de los latinos y 65 por ciento de los asiáticos (CNN, 2016b).

Al mismo tiempo que se daban las mencionadas transformaciones en el proceso productivo de la economía y en el ámbito cultural, las elites económicas surgidas de la globalización se fueron apoderando de las instituciones políticas. Francis Fukuyama lo define como un fenómeno de repatrimonialización de las instituciones (Fukuyama, 2014). Es decir, como en épocas anteriores, que se pensaban superadas, los poderosos grupos de intereses particulares ejercen un desmedido poder sobre el gobierno. Jonah Goldberg argumenta, en el mismo tenor de los teóricos del elitismo, que es ineludible que se formen las elites, por ello lo importante es evitar que éstas sólo trabajen para sus propios intereses. A partir de las ideas de los Padres Fundadores de Estados Unidos sostiene que lo verdaderamente relevante es prevenir que ninguna facción, ni aún la mayoría, tenga las condiciones para manipular al Estado sólo para perseguir sus propias ambiciones (Goldberg, 2018: 171).

También apunta que, cuando la sociedad se encuentra tan dividida socialmente, los pesos y contrapesos ocasionan que el gobierno se vuelva más ineficiente. Toma más tiempo llegar a consensos sobre las políticas públicas. Más bien se presenta una especie de empate entre las distintas ramas del gobierno (Fukuyama, 2014). Subraya este autor que en la medida en que las instituciones políticas no se adaptan a los cambios, se vuelven rígidas y no funcionan adecuadamente.

Las instituciones han perdido legitimidad y se ha producido una cierta falta de representatividad en Estados Unidos, un fenómeno que se repite en varias partes del mundo. El 81 por ciento de los estadounidenses está insatisfecho con la manera en que se gobierna al país; el 53 por ciento de la población opina que ningún partido lo representa, y el 57 por ciento tiene poca o nula confianza en el gobierno federal para resolver los problemas. Es decir, existe una seria crisis de legitimidad. El 23 de septiembre de 2016 Fox News hizo pública una encuesta en que se encontró que el 60 por ciento de los republicanos se sentía traicionado por los líderes de su partido (Green, 2017: 177). Dado este panorama de gran división social, Bannon pensaba, según Green, que se debía regresar a las raíces y que la narrativa populista, patriótica, promilitar y antiinmigrante era lo único que podía salvar al Partido Republicano (Green, 2017: 184).

La llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, el primer presidente afroamericano, contribuyó a incrementar la ya de por sí gran división social, sobre

todo debido a la promulgación de la Affordable Care Act (ACA), una ley para el sistema de salud público, que desde entonces fue conocida como Obamacare. Como ya lo hemos anotado, el segmento de trabajadores WASP (*white, anglosaxon and protestant*) percibía que únicamente se gobernaba para las minorías. Por ejemplo, también se concibieron legislaciones y reglamentos para salvar a algunos de los deudores que habían perdido su casa por no poder pagar sus hipotecas durante la crisis de 2008-2009, y muchos trabajadores blancos argumentaban que no era justo que ellos tuvieran que cargar con los errores financieros de otros. Por otra parte, la ley Obamacare fue considerada una nueva carga fiscal injusta, pues el seguro beneficiaba sobre todo a las clases más pobres, mientras la mayoría de los quejosos sí contaban con seguros médicos privados que ellos mismos sostenían.

Al analizar las tendencias ideológicas de la sociedad estadounidense de principios del milenio, observamos que el 53 por ciento de los republicanos se considera conservador y sólo el 34 por ciento, moderado; mientras que del lado de los demócratas, el 53 por ciento se describe como liberal y el 31 por ciento como moderado (Saad, 2011). Paul Taylor va todavía más allá para explicar la división ideológica cuando afirma que el “92 por ciento de los republicanos está a la derecha de la media de los demócratas en sus opiniones sociales, económicas y políticas; y el 94 por ciento de los demócratas está a la izquierda de la media republicana en las suyas” (Taylor, citado en Bremmer, 2018a: 121). El tradicional consenso de la población en el centro político se ha roto y ya no existe un verdadero diálogo entre ambos grupos de la sociedad. Las sociedades imaginadas, a las que se refería Benedict Anderson, que han construido los demócratas y los republicanos, cada grupo por su lado, no sólo son diferentes sino antagónicas.

La sociedad imaginada de los demócratas es pluralista, multicultural, secular, pro aborto (apoyan la decisión *Roe vs. Wade* de 1973), pro derechos LGBTQ+, bilingüe, feminista y cree en la necesidad de hacer cambios legales en favor de las minorías que han sufrido grandes discriminaciones; es también pro impuestos progresivos para combatir las grandes desigualdades, no ataca a la inmigración indocumentada y está en favor de la legalización de la marihuana. Por su parte, la sociedad imaginada de los republicanos la debe dirigir la raza blanca (en 2000, 90 por ciento de los simpatizantes de este partido eran blancos), con el inglés como única lengua, está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, del aborto y de lo que consideran

excesos del feminismo; también se oponen al reconocimiento de derechos para la comunidad LGBTQ+, a la inmigración en general, no sólo a la indocumentada, y a la legalización de la marihuana; y por supuesto apoyan decididamente que se impartan clases de religión en las escuelas (76 por ciento de los cristianos evangélicos blancos se identifica como republicano). “El realineamiento político se ha dado más allá de [la clásica dicotomía entre] liberales y conservadores. Las bases sociales, étnicas y culturales partidistas han cambiado dramáticamente, dando lugar a partidos renovados que representan no sólo las diferentes propuestas políticas, sino a diversas comunidades, culturas y valores” (Levitsky y Ziblatt, 2018: 170). Agregan estos últimos autores que se han tornado partidos de la identidad, la religión y la raza, y que a partir de esta circunstancia se crean nuevos conflictos, razón por la cual hoy en día los partidos políticos se califican entre sí como una amenaza existencial.

La muestra más clara de esta división se expresó en la elección de 2016, cuando Donald Trump obtuvo la victoria gracias al voto en el Colegio Electoral, con 306 electores contra 232, pero Hillary Clinton ganó la votación popular con casi tres millones de sufragios más que su contrincante. Solamente acudió a las urnas el 46.9 por ciento de la población. El 25.6 por ciento se manifestó por Hillary y el 25.5 por Trump. Las ciudades lo hicieron en su mayoría por la primera y el campo otorgó el triunfo al actual presidente. A pesar de contar en un inicio con el dominio de los republicanos en ambas cámaras del Congreso, el titular del Ejecutivo no tenía un mandato firme, por lo que habría sido fundamental que tendiera puentes hacia la parte de la sociedad que no se inclinó por él, para entender también sus preocupaciones e intereses y así gobernar para todos, pero éste no fue el caso. Donald Trump ha gobernado sólo para su base. Bremmer asegura: “Trump tomó deliberadamente la decisión de provocar el enojo de un grupo de estadounidenses contra otros para su beneficio político personal” (Bremmer, 2018a: 123).

Curiosamente, el proceso electoral de 2016 fue cuestionado tanto por la candidata Clinton como por el presidente Trump, aunque por distintas razones. El segundo argumentó que Hillary Clinton ganó el voto popular porque muchos de los que emitieron su sufragio en realidad no eran ciudadanos estadounidenses, pero nunca presentó pruebas que confirmaran su hipótesis. Más aún, a pesar de que se creó una comisión especial para investigar el gran fraude electoral que Trump denunciaba nunca se encontró ninguna evidencia. La candidata perdedora, por su parte, formuló una acusación aún

más fuerte sobre el proceso, pues aseguró que existió intervención del gobierno ruso en las elecciones para favorecer al candidato republicano. Varios colaboradores del presidente fueron declarados culpables de mentir o por tener conflictos de intereses en el caso, aunque el fiscal especial designado para investigarlo, Robert Muller, dictaminó luego de casi dos años de indagatorias que era imposible demostrar la colusión entre la campaña electoral de Trump y el gobierno de Rusia, sin que este resultado exima al presidente del probable delito de obstrucción de la justicia.

Es importante resaltar que la Comisión de Asistencia Electoral se refirió desde octubre de 2016 a una posible intromisión en algunas oficinas locales y estatales electorales ese mes. Esta sospecha hizo crecer las preocupaciones acerca de los “intentos de Estados-nación, como Rusia, o de otros actores no estatales, de manipular o utilizar campañas de desinformación para influir en la elección; el Departamento de Seguridad Interna, por medio de la Comisión de Asistencia Electoral, proporcionó ayuda a los estados para que pudieran blindar sus procesos electorales” (Burriss y Fischer, 2016).

También se ha hablado de la llamada Estrategia “Mapa Rojo” de los hermanos Koch, que se formuló por la llegada de Obama a la Presidencia. Decidieron desde entonces empezar a ejecutar un plan desde el nivel subnacional para derrotar a los demócratas en las sucesivas elecciones. Invirtieron mucho dinero en los procesos locales, instrumentaron ataques y campañas sucias en contra de los candidatos demócratas en los niveles subestatales, y poco a poco se fueron apoderando de las asambleas de los estados y de las gubernaturas (Green, 2017: 123). Con la participación de miles de colaboradores consiguieron la descripción y los datos de 250 millones de consumidores y de 190 millones de votantes activos; en 2014 ganaron las dos cámaras y pudieron bloquear casi todas las propuestas del presidente Obama (Mayer, 2017: 253-254). Gracias a la decisión de la Suprema Corte conocida como *Citizen United* pudieron destinar grandes cantidades de dinero a candidatos afines para lograr los objetivos de su estrategia. Dicha decisión permite la donación directa de inmensos montos a las campañas electorales, con el argumento de que prohibirlas o limitarlas afectaría el derecho de libre expresión de las grandes corporaciones. Organizaciones con muchos recursos, como Freedom Works y Americans for Prosperity, así como numerosos comités de acción política (Political Action Committees, PACs), como Tea Party Express y Tea Party Patriots, apoyaron económicamente a más de cien candidatos al Congreso

y más de cuarenta fueron electos (Levitsky y Ziblatt, 2018: 161). Para las elecciones de 2016 había treinta y tres gobernadores republicanos y la mayoría de los congresos locales también lo eran, además de que dominaban asimismo el Congreso federal. En la Suprema Corte eran cinco los ministros conservadores contra los cuatro liberales. Con esa correlación de fuerzas los pesos y contrapesos no podían funcionar como debían.

Se ha argumentado bastante que, debido a que los republicanos tenían el control sobre las legislaturas locales realizaron diversos cambios orientados a dificultar el voto de los grupos sociales más desfavorecidos, en concreto, de los afroamericanos y los latinos. Entre otras medidas, impusieron restricciones como la necesidad de presentar una identificación en el momento de pretender inscribirse en el registro electoral, de la que carecían muchos de los integrantes de estas minorías.

Asimismo, con la estrategia de redistribución conocida como *gerrymandering* lograron concentrar en ciertos distritos los posibles votos opositores, así como asegurar su triunfo en muchos de los demás distritos, que antes eran mucho más competidos, y con ello reducir la fuerza de la oposición en amplias regiones del país. Un ejemplo de éxito es el caso de Texas, pues debido al proceso de redistribución en 2004, seis curules pasaron de los demócratas a los republicanos (Levitsky y Ziblatt: 2018). Este dominio republicano cambió en las últimas elecciones intermedias, de 2018, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara baja.

Los comicios de noviembre de 2018 arrojaron los siguientes resultados: en el Senado quedaron cuarenta y siete senadores demócratas (-2) y cincuenta y tres republicanos (+2). La Cámara baja pasó a manos de los demócratas, con 235 (+40) representantes contra 199 (-40) de los republicanos. Por otra parte, el Partido Demócrata obtuvo veintitrés gubernaturas mientras que el Republicano consiguió veintisiete (Real Clear Politics, 2018). Otra estrategia que los republicanos utilizaron en forma exagerada para bloquear al gobierno del presidente Obama fue la conocida como *Filibuster*, que consistía en alargar indefinidamente los debates en el Congreso; mediante ella consiguieron, por ejemplo, que las confirmaciones de jueces de circuito durante esa administración cayeran a sólo un 50 por ciento de las propuestas, cuando en 1980 la proporción era del 90 por ciento (Levitsky y Ziblatt, 2018: 163).

En el periodo de las primarias, las elecciones internas de los partidos para seleccionar a su candidato presidencial, que se realizan estado por estado, las

declaraciones del entonces aspirante a la nominación republicana, que proponía políticas extravagantes, atrajeron rápidamente la atención de la prensa. Esta decisión estratégica le permitió opacar a los demás precandidatos republicanos y también a la candidata demócrata a la Presidencia ya en plena carrera electoral, pues casi siempre logró que el debate se centrara en una agenda que él imponía. Esto último lo consiguió, además, gracias a su habilidad para obtener cierta publicidad gratis por parte de los medios. Las grandes cadenas de televisión y los más importantes periódicos y programas de análisis político y noticias, por otra parte, aunque fueron reiteradamente atacados en forma directa por el candidato republicano, no podían ignorar sus escandalosas declaraciones, debido entre otras causas, a que los medios tradicionales han perdido mucho mercado *vis-à-vis* las redes sociales, por lo tanto, necesitaban transmitir y publicar las noticias sobre Trump.

Sus grandes habilidades mediáticas y su dominio de la mayoría de los espacios informativos se conjuntó con su innovadora estrategia de manejo de la revolución tecnológica de internet, lo que le permitió una comunicación directa con las masas, sobre todo a través de Twitter, algo que antes era impensable. Moisés Naím ha analizado el impacto de esta revolución tecnológica en el ejercicio del poder y argumenta que ha permitido su descentralización y el surgimiento de nuevos actores que en poco tiempo adquieren una gran capacidad de influencia política (Naím, 2014). Esto último en mucho nos explica la gran acumulación de poder y capacidad de influir que tanto Donald Trump como Bernie Sanders (populista de izquierda) lograron construir tan rápidamente. En concreto, la red social Facebook, con la ayuda de la empresa Cambridge Analytics, como ya lo mencionamos, se convirtió en una arma fundamental en las manos de Trump para ganar la elección, como lo ha demostrado Vaidhyanathan, aunque también señala que resulta muy cuestionable que en el sistema político democrático estadounidense las elecciones puedan decidirse conforme a la motivación mediática y no a través de la deliberación (Vaidhyanathan, 2018: 149). Para 2016 ya se podía armar una estrategia a partir de Facebook, para focalizarse en sus usuarios en su calidad de potenciales electores, a quienes se les mandaban mensajes para invitarlos a votar por Trump, o para inhibir que lo hicieran por Hillary; como lo explica este autor, esta red social ya contaba con toda la información disponible con base en la tecnología de *big data* sobre las preferencias electorales de sus millones de consumidores (Vaidhyanathan, 2018: 161).

También mediante su *reality show* de televisión, “El aprendiz”, se dio a conocer entre amplias audiencias de afroamericanos e hispanos, porque en su programa incluyó a sujetos pertenecientes a esas minorías, presentándolos innovadoramente como emprendedores, lo cual le agenció gran aceptación entre esos grupos sociales (Green, 2017: 97). La forma de expresarse de Trump, poco cuidadosa, ayudaba a que alcanzara una clara conexión con las masas, sobre con las de su base republicana, así como a despertar en ellas un claro sentimiento *antiestablishment*.

En su campaña presidencial, Trump ofreció una agenda populista, pero no impulsaba una ideología clara, siendo Steve Bannon el encargado de formularla: el cambio sería *antiestablishment*, anticorporaciones de medios, antielites y anticorrupción; prometió reducir los impuestos; también sería antiglobalización, anti-TLCAN, anti-TPP, anti-OTAN; el eslogan “America First Again” implicaría regresar los empleos sustraídos a Estados Unidos; sería una transformación con una visión antiinmigrantes, especialmente mexicanos y musulmanes. Esta oferta resultó muy atractiva, principalmente para el segmento de población masculino, blanco, mayor de sesenta años y con escasa educación formal, que había desarrollado baja autoestima, pérdida de identidad, que había sido fuertemente afectado por la globalización, la tecnología y la migración: por fin alguien prometía devolverles el mundo que “otros” les robaron.

Sin subestimar los perniciosos efectos de la economía globalizada en la población estadounidense descrita, la idea de volver al pasado, de hacer a “America Great Again” también afectaría muchos intereses de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos que sí han resultado beneficiados por la globalización, como lo son, por ejemplo, los trabajadores cuyas fuentes de empleo están ligadas directamente al comercio con México. Vale la pena subrayar que el conservadurismo estadounidense, a diferencia del inglés, ya desde el siglo xx siempre miraba hacia el futuro, y sólo ahora voltea con cierta nostalgia hacia un pasado idílico, al pretender reactivar industrias en franca decadencia o ya consideradas obsoletas por razones diversas, como la minería del carbón; por anhelar volver a una sociedad utópica que ya no puede existir.

Sin embargo, es muy cierto lo que Bannon ha sostenido con insistencia: “Trump es el líder de un levantamiento popular [...]; lo que Trump representa es la restauración del verdadero capitalismo estadounidense, así como una revolución en contra de un socialismo promovido por el Estado. Las elites se apropiaron de todos los beneficios [del sistema] para ellas y han empujado

hacia abajo a los trabajadores y a las clases medias de Estados Unidos” (Green, 2017: 236). Se trata de un movimiento fundamentalmente antiglobalización y *antiestablishment* dirigido específicamente en contra de las corruptas elites globales.

Desafortunadamente, Donald Trump sí ha estado atacando, a lo largo de los primeros tres años de su gestión, las normas y prácticas políticas que Levitsky y Ziblatt consideran fundamentales para que funcionen los pesos y contrapesos del sistema político democrático estadounidense. Por un lado, ha desestimado el valor de la tolerancia, en tanto que considera a todos los que piensen en forma diferente de él como sus enemigos. Por otro, no se restringe en utilizar hasta el límite todas las facultades que la ley le confiere, que, aunque sin duda son legales, tradicionalmente la mayoría de los presidentes no las usan más allá de lo razonable, para no abusar de su poder. Por el contrario, el presidente Trump, como hemos dicho, ha emitido una gran cantidad de órdenes ejecutivas (Obama también abusó de ellas y fue fuertemente criticado por el propio Trump), e incluso llegó a declarar una emergencia nacional en la frontera, en relación con la inmigración, con el objetivo único de exigir recursos económicos desmesurados para construir el muro divisorio con México que prometió en su campaña. Ya en el colmo de esta actitud, abiertamente ha mencionado la facultad constitucional que tiene hasta de perdonarse a sí mismo por potenciales faltas cometidas, en el uso de su facultad de perdón presidencial. Esta erosión de la democracia empezó desde la década de los sesenta del siglo xx, de acuerdo con estos autores, fruto de una profunda polarización de la sociedad que se vio expresada cuando a partir de esa fecha, el Partido Demócrata claramente se definió como liberal y el Republicano como conservador; con anterioridad a ese en muchos sentidos transformador periodo, dentro de cada partido convivían los liberales y los conservadores (Levitsky y Ziblatt, 2018: 169).

En razón de que la presente administración ha optado por un cambio radical tanto en el terreno económico, como en el nivel de las alianzas internacionales y de la política exterior, resulta urgente y fundamental que los pesos y contrapesos del sistema funcionen mejor que nunca, ya que las consecuencias de que así no suceda, no sólo serán negativas para Estados Unidos sino para todo el mundo. La deliberación profunda acerca de las políticas públicas, en donde se escuchen las voces de todas las partes, tanto de los pre-
visibles ganadores como de los posibles perdedores con su implementación,

es fundamental para obtener un mejor resultado, tanto para las mayorías como para las minorías. Toca a la arquitectura institucional de la democracia estadounidense, así como a la participación activa de sus ciudadanos, llegar a construir acuerdos benéficos tanto para Estados Unidos como para el resto del sistema internacional, dado que hasta el día de hoy este país continúa siendo el hegemon cuyo papel es fundamental para la geopolítica mundial.

Ante esta situación, hemos empezado a atestiguar algunas reacciones democráticas fundamentadas en el federalismo, ya que provienen de los gobernadores, los alcaldes y las cortes locales, todos los cuales cuestionan las distintas políticas públicas establecidas mediante órdenes ejecutivas. Los pesos y contrapesos del sistema, aunque parecen rechinar, a pesar de todo siguen funcionando. Algunos gobernadores y muchos miembros de la sociedad civil, por ejemplo, criticaron severamente la salida de Estados Unidos del Acuerdo del Cambio Climático de París. Varios jueces se manifestaron e incluso dictaminaron en contra de la orden ejecutiva que pretendía impedir la inmigración de musulmanes. Otros más se opusieron y desaprueban las deportaciones y encarcelamientos masivos de indocumentados y la separación de las familias migrantes. La justificación que ofrecen casi siempre es que se trata de medidas violatorias de la Constitución (Márquez-Padilla, 2017).

Nos encontramos, sin duda, en una época de grandes incertidumbres, debido a los constantes pronunciamientos que cuestionan los paradigmas del libre mercado, la globalización, e incluso la democracia. El líder del país hegemón establece las nuevas tendencias dominantes: nacionalismo, proteccionismo, política antiinmigrante, populismo y aislacionismo. Propone la reconfiguración del equilibrio del poder a nivel mundial. Se aleja de sus amigos y busca alianzas con algunos enemigos tradicionales, lo que conlleva severas consecuencias geopolíticas. Critica a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y pugna por la creación de nuevas alianzas, incluso en cierto momento sugirió una Estados Unidos-Rusia. Impulsa el predominio de las decisiones unilaterales y la reducción de facultades para las instituciones internacionales. Propone una política exterior en la que endurece sus estrategias de “poder duro” y deja de lado a los llamados “poder suave” y “poder inteligente”, al reposicionar a su aparato industrial-militar como el eje de su desarrollo. Richard Haass nos lo explica así: “Estados Unidos no puede permanecer sólo, mucho menos no ser afectado por un mundo desordenado. La globalización, más que una decisión, es una realidad” (Haass, 2017: 287).

De acuerdo con este autor, los problemas actuales son globales y los países tienen que crear alianzas para cooperar y resolverlos en forma colectiva; ninguna nación, por más poderosa que sea, puede imponer el orden internacional, por lo que una política exterior unilateral tendrá pocas posibilidades de ser exitosa.

Sobre todo, la administración Trump significa un peligro para la democracia en tanto que abiertamente apoya y dialoga con líderes como Vladimir Putin; incluso, el presidente llegó a declarar que admira al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, por el control total que ejerce en su país. Al mismo tiempo, se rehúsa a seguir reconociendo el papel de Estados Unidos como guardián del mundo, en la protección de los derechos humanos, la democracia y el libre comercio. En el pasado, nos recuerdan Levitsky y Ziblatt, “los gobiernos de Estados Unidos utilizaban la presión diplomática, la asistencia económica y otras herramientas de política exterior para facilitar [los procesos de] democratización, sobre todo después de la posguerra. El periodo 1990-2015 ha sido, sin lugar a dudas, el cuarto de siglo más democrático de la historia mundial” (Levitsky y Ziblatt, 2018: 205).

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, por lo tanto, nos hace prever que con mucha seguridad seremos testigos de retrocesos en estos ámbitos: los de la globalización, la democracia y el liberalismo. Lo que resulta extraño es, precisamente, que esté rompiendo con el paradigma económico-político del liberalismo democrático, que había sido propuesto, aceptado y refrendado por los estadounidenses en todas las elecciones celebradas después de la segunda guerra mundial; no obstante, debemos aceptar que aunque todos estos cambios generan una gran inestabilidad geopolítica, no por ello debemos dejar de reconocer que el presidente Trump descubrió y desenmascaró muchos errores de la política exterior de Estados Unidos, además de que supo capturar y capitalizar el rechazo de gran parte de la población en esta materia, instalado en la sociedad desde mucho antes de su victoria.

Curiosamente, un analista como Stephen Walt está de acuerdo con este cuestionamiento de la política exterior de Estados Unidos que habían conducido tanto los demócratas como los republicanos, y que se basaba en los principios del liberalismo democrático, ya que considera que fundamentalmente ha generado grandes problemas. Argumenta:

Los recientes esfuerzos de Estados Unidos por administrar y dar forma a la política mundial [no han tenido como consecuencia] un país más seguro ni más rico, y tampoco han avanzado en el ámbito de sus valores políticos. Por el contrario, la política exterior estadounidense [ha “conseguido” multiplicar] sus enemigos y desestabilizar regiones clave en el mundo, así como desperdiciar miles de vidas y billones de dólares en guerras fallidas, llevado a cabo serios abusos de los derechos humanos en el exterior, y comprometido importantes libertades civiles (Walt, 2018: 255).

Sobre la política de los neoconservadores de exportar la democracia, este autor explica que la hegemonía liberal promueve el sistema democrático en lugares muy diferentes, en donde incluso se ha utilizado la solución militar y se ha interferido para dictar arreglos políticos locales. En muchas ocasiones, para diseminar los valores estadounidenses se ha optado por recurrir a cambiar el régimen a través de debilitar las instituciones locales, con lo que se crearon espacios sin gobierno en donde han podido proliferar con facilidad los grupos terroristas (Walt: 2018: 264). Por todo lo anterior, sugiere que se respete la soberanía de los países, para no engendrar extremismos nacionalistas. Considera que la mejor forma de expandir la democracia liberal y los derechos humanos básicos es dar un buen ejemplo y mejorar la situación socioeconómica propia, en Estados Unidos, y no manipulando la política en el exterior.

Sin embargo, Walt no pugna por el aislacionismo sino por lo que él llama *offshore balancing* (equilibrio con el exterior), que depende de una diplomacia inteligente en favor de los objetivos estratégicos más amplios del país: entre ellos, fundamentalmente promover la paz, pero no sólo por motivos morales, sino porque ayuda a consolidar los intereses propios. En su opinión, sólo se debe recurrir a la guerra cuando se le imponga a Estados Unidos desde el exterior.

En esta nueva estrategia de política exterior, Walt se enfoca en las tres regiones que considera fundamentales para Estados Unidos: Europa, el Noroeste asiático y el Golfo Pérsico (produce 30 por ciento del petróleo mundial y cuenta con el 55 por ciento de las reservas probadas de gas y de petróleo). El autor promueve el surgimiento de hegemonías locales en Europa y en Asia que compartan el rol de policías del mundo o de países “indispensables”, que a la fecha ha jugado la Unión Americana con un alto costo económico y de vidas. Aunque un hegemonía en el Golfo Pérsico no sería deseable, sos-

tiene, porque puede interferir con los intereses estadounidenses. Se trata simplemente de equilibrar y de evitar que se consolide un poder que represente una competencia real. La expansión de la OTAN, por ejemplo, trajo consigo la consecuencia no deseada de unir a China y Rusia. Finalmente, Walt aboga por recurrir siempre a la diplomacia y no al poder militar, excepto como última instancia. “Priorizar la diplomacia significa esforzarse para llegar con otros a soluciones mutuamente aceptables más que sólo dictarlas” (Walt, 2018: 272).¹

¹ Para profundizar en una propuesta sobre la justicia en las relaciones internacionales, véase Márquez-Padilla (2014).